




PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**SALA LABORAL - TRIBUNAL SUPERIOR**

 16/04/2025 - Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 117

Año: 2025 Tomo: 2 Folio: 362-365

EXPEDIENTE SAC: 7087226 - LOPEZ LOZANO, TRISTAN MANUEL C/ COSEME S.A. - ORDINARIO - DESPIDO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 117 DEL 16/04/2025

En la ciudad de Córdoba, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique Rubio y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: **"LOPEZ LOZANO TRISTAN MANUEL C/ COSEME S.A. – ORDINARIO - DESPIDO" RECURSO DE CASACION - 7087226**, a raíz del recurso concedido a la demandada en contra de la sentencia N° 398 y su auto aclaratorio N° 417, dictados con fechas 10/11/2022 y 28/11/2022 por la Sala Quinta de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor vocal doctor Julio Francisco Manzanares -Secretaría N° 9-, en los que respectivamente se resolvió: “I) Hacer lugar a la demanda incoada por Tristán Manuel López Lozano en contra de COSEME SA en cuanto reclama el pago de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso omitido, integración del mes de despido (arts. 245, 232 y 233 LCT), art. 2 de la ley 25.323 y art. 80 de la LCT; sueldo anual complementario primer y segundo semestre del año 2016, proporcional del año 2017, indemnización por vacaciones no gozadas del año 2016 y proporcionales del año 2017, haberes del mes de febrero de 2017 y de diecisiete días del mes de marzo del mismo año y la entrega de la documentación establecida en el art. 80 de la LCT. Rechazarla en lo demás pretendido. II) Condenar, en consecuencia, a la

demandada a abonar al actor dentro de los diez días de notificado el auto aprobatorio de la liquidación las sumas que se calcularán conforme a las pautas dadas al tratar la cuestión, con más los intereses allí fijados. III) Imponer las costas, en la medida de la condena, a la accionada (art. 28 LPT) y diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando exista base económica concreta para ello... IV) Remitir copia de la presente a la AFIP en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 17, ley 24013, a sus efectos...” y, “Aclarar la Sentencia N° 398 de fecha 10/11/2022, la que quedará redactada en el punto I) de su Resuelve del siguiente modo: “(...) I: Hacer lugar a la demanda incoada por Tristán Manuel López Lozano en contra de COSEME SA en cuanto reclama el pago de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso omitido, integración del mes de despido (arts. 245, 232 y 233 LCT), art. 1 de la ley 25.323 y art. 80 de la LCT; sueldo anual complementario primer y segundo semestre del año 2016, proporcional del año 2017, indemnización por vacaciones no gozadas del año 2016 y proporcionales del año 2017, haberes del mes de febrero de 2017 y de diecisiete días del mes de marzo del mismo año y la entrega de la documentación establecida en el art. 80 de la LCT. Rechazarla en lo demás pretendido...”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es procedente el recurso de la demandada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué resolución corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Luis Eugenio Angulo y Domingo Juan Sesín.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:**

**El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:**

1. El recurrente se queja de la admisión de la demanda en su contra. Denuncia arbitrariedad en la decisión porque a su entender el Juzgador suplió la negligencia

probatoria de la actora y aplicó de manera errónea la presunción del art. 23 LCT. Alega que se probó que López Lozano trabajó como médico dentro de la institución, con libertad de criterio, independencia técnica, jurídica y económica, ocupando un consultorio en escasos horarios semanales, fijando cirugía de pacientes a los que operaba los días en los que el quirófano estaba disponible. Afirma que el Sentenciante tergiversó los dichos de los testigos. Por último, acusa falta de fundamentación, pues no expuso las razones por las que desestimó las pruebas que le eran favorables a su parte.

2. La lectura del pronunciamiento revela que la decisión no es derivación razonada de las constancias de la causa.

En primer lugar, cabe señalar que en situaciones fácticas análogas a la presente, en las que se discutió la relación de dependencia de profesionales de la salud con los nosocomios en los que se desempeñaron, esta Sala ha señalado que la presunción de la existencia de contrato laboral por la sola prestación de los servicios debe analizarse con prudencia, pues la solución justa requiere una valoración precisa de los hechos comprobados, a la luz del derecho aplicable (SS 139/2021, 75/2023 entre otras). Ello es así porque, pese a la amplitud que consagra la presunción del art. 23 de la LCT, la propia normativa estipula como excepción definitivamente excluyente a la situación en la que el *animus* o causa que motivó el acuerdo entre los contratantes resulte ajeno a las reglas protectorias que caracterizan el régimen laboral. Según estos parámetros, las circunstancias tenidas en cuenta por el Juzgador, no necesariamente conducían a su encuadramiento en el campo del derecho del trabajo, ya que dejó en sombras aspectos que resultaban decisivos y sustentaban una conclusión diversa.

En efecto, de las constancias de autos surge que si bien López Lozano prestó servicios en el área de traumatología desde el mes de febrero de dos mil seis, luego de once años y en función de que el Sanatorio le comunicó -04/07/2017- que no realizaría más

cirugías en la institución es que efectúa el reclamo formal sobre la registración de la relación (fs. 3 vta.). De ese modo, no es razonable situarse dentro del ámbito del derecho del trabajo si durante más de una década el profesional se desempeñó sin exponer conflicto alguno y sin exigir de ninguna manera el cumplimiento de los derechos y prerrogativas que a su entender le correspondían. Resulta trascendente el propio marco al que las partes sometieron su vinculación regulando sus conductas durante -se reitera- más de once años de manera autónoma. El tiempo transcurrido en una misma situación lleva a entender que ha sido consentida. El accionante como decisión propia y voluntaria pudo evaluar la conveniencia de desarrollar su tarea en el centro asistencial demandado del modo efectuado.

Por otra parte, la transcripción de la prueba realizada por el Juzgador advierte su análisis parcial. Dejó de lado que las facturas obrantes a fs. 57/133 dieron cuenta de los diferentes montos que percibió el actor en concepto de honorarios a lo largo del periplo en cuestión, lo cual no se compadece con lo expuesto en demanda -suma fija y mensual de pesos treinta y nueve mil (\$39.000)- (fs. 3). Además, el a quo desdénó lo expresado por el testigo Lauret en relación a la jornada cumplida: si bien tenían días fijos de quirófano, después era variable, existían cirugías de urgencia y siempre había un equipo traumatológico de guardia. Tampoco reparó en lo manifestado por el referido declarante: si se ausentaba un mes no cobraba y que las vacaciones debían ser coordinadas con el resto del equipo. A su vez, omitió que Bazán dijo que el plan quirúrgico era decidido por el traumatólogo. Tales aspectos -no menores-, que fueron obviados por el Sentenciante, nos alejan de la subordinación propia del contrato de trabajo.

A su vez, el hecho de que la estructura, los pacientes, los insumos fueran proveídos por el Sanatorio, que los horarios fueran fijados por la clínica, que el actor debiera comunicar su ausencia a las secretarías para la suspensión de su agenda, que realizaran

guardias y pudieran ser llamados de urgencia (Torres y Bazán) da cuenta de que la actividad se desarrollaba dentro de una organización y que las notas que aparecen como de subordinación son las necesarias para el ejercicio de la profesión dentro de una estructura preexistente como es la de la demandada. Entonces, los condicionamientos que conducirían a considerar la vinculación como dependiente no son tales, sino que se relacionan con el tipo de servicio que se presta, que requiere, por su trascendencia, de cierta organización que brinde seguridad a los beneficiarios. Resulta claro, entonces, que entre las partes medió una vinculación asociativa, signada por la mutua conveniencia. La institución hospitalaria y el profesional se beneficiaban mutuamente: una de la experticia de su especialidad y el otro de la estructura de una clínica conocida. Más aún frente a una dilatada trayectoria que transcurrió pacíficamente y que viene a reflejar el tipo de arreglo concertado y en el que la buena fe contractual adquiere una fuerza preponderante.

3. En consecuencia, corresponde casar el pronunciamiento -art. 104, CPT-. Entrando al fondo del asunto y por las razones precedentemente expuestas rechazar la demanda en todas sus partes. Costas por su orden, en virtud que las particularidades verificadas pudieron inducir a la actora a reclamar.

Voto por la afirmativa.

**El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo:**

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

**El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:**

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:**

**El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:**

A mérito de la votación que antecede, debe admitirse el recurso de la demandada y, en consecuencia, rechazar la demanda. Con costas por su orden atento la naturaleza de la cuestión debatida. Los honorarios de los Dres. Franco José Punte y Rodrigo Manuel Gigena Lirusso serán regulados por el a quo en un treinta por ciento, para cada uno, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 9459 sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo considerarse el art. 27 de la mencionada ley.

**El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo:**

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

**El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:**

Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

**RESUELVE:**

- I. Admitir el recurso deducido por la demandada y, en consecuencia, casar el pronunciamiento conforme se expresa.
- II. Rechazar la demanda interpuesta por el Sr. Tristán Manuel López Lozano.
- III. Con costas por su orden.
- IV. Disponer que los honorarios de los Dres. Franco José Punte y Rodrigo Manuel Gigena Lirusso sean regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento, para cada uno, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 9459 sobre lo que fue motivo de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib.
- V. Protocolícese, hágase saber y bajen.

Texto Firmado digitalmente por:

**ANGULO MARTIN Luis Eugenio**

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Fecha: 2025.04.16

**RUBIO Luis Enrique**

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Fecha: 2025.04.16

**SESIN Domingo Juan**

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Fecha: 2025.04.16

**LASCANO Eduardo Javier**

SECRETARIO/A T.S.J.

Fecha: 2025.04.16